

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario con radicado número 05 360 31 05 002 2016 00204 promovido por la señora **MARÍA ELSIE VALENCIA ROLDÁN** en contra de **CERVECERÍA UNIÓN S.A.**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la sociedad demandada frente a la sentencia emitida el 7 de septiembre de 2017 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **099**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

**ANTECEDENTES**

La señora María Elsie Valencia Roldán, demandó a Cervecería Unión S.A. pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de su cónyuge Federico de Jesús Arango Puerta, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso, que contrajo matrimonio con el señor Federico de Jesús Arango Puerta el 25 de agosto de 1962. De dicha unión procrearon a Víctor Hugo y María Patricia Arango Valencia, mayores de edad. Convivieron de manera permanente y constante desde la fecha en la cual contrajeron matrimonio durante 17 años hasta 1979, cuando se separaron de cuerpos y realizaron liquidación y disolución de la sociedad conyugal, y pese a ello, el señor Federico de Jesús cumplía con la cuota alimentaria de sus hijos, cancelando el canón de arrendamiento donde habitaban. Aduce que su cónyuge laboró al servicio de la empresa Cervecería Unión S.A. desde el 26 de noviembre de 1945 hasta el 25 de enero de 1968, y dicha sociedad le reconoció una pensión de jubilación efectiva a partir del 1° de marzo de 1978. El señor Federico de Jesús Arango Puerta falleció el 12 de enero de 2008. Le solicitó a Cervecería Unión S.A. la sustitución pensional, y la sociedad mediante comunicado de 5 de mayo de 2008 se la negó considerando que no existió con el causante una convivencia real y efectiva dentro de los 5 años anteriores a la fecha de su fallecimiento.

En sentencia proferida el 7 de septiembre de 2017, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí condenó a Cervecería Unión S.A. a reconocer y pagar a la señora María Elsie Valencia Roldán, lo siguiente: la sustitución pensional derivada del fallecimiento de su cónyuge Federico de Jesús Arango Puerta, desde el 11 de abril de 2013; la suma de \$40.396.843,00 por retroactivo pensional causado hasta el 7 de septiembre de 2017; intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 11 de abril de 2013 hasta la fecha del pago efectivo de la obligación; y costas del proceso. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

El apoderado de Cervecería Unión S.A. no comparte la decisión de primera instancia. **Primero**, porque la demandante no acreditó el requisito de convivencia con el causante durante 5 años anteriores a la fecha de su fallecimiento exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. **Segundo**, porque entre los cónyuges

hubo separación de cuerpos desde 1979 y la demandante confesó que se fue a vivir a los Estados Unidos desde 1981. **Tercero**, porque la Juez A quo fundamenta su decisión en el sentido que la cónyuge simplemente debe demostrar 5 años de convivencia en cualquier tiempo, no obstante, si bien existe unanimidad por parte de la actora y de los testigos al referir a una convivencia durante 17 años, lo cierto es que a ninguno de los testigos les consta la fecha del matrimonio, la fecha de la separación, ninguno frecuentaba la casa de la pareja, ninguno tuvo contacto directo con el causante, y lo que saben de dicha relación y convivencia “...es por oídas de la casa, incluso de la mamá de la demandante...”. **Cuarto**, porque respecto de las declarantes allegadas, la señora “...Gladis indica que no visitaba la casa, que no hablaban de su relación de pareja, la última testigo Martha, nunca fue a la casa de la demandante, todo lo escuchó porque se mantenía en la casa de la demandante, entonces realmente en este proceso no hay una prueba certera ni siquiera de esos años. La demandante afirma convivió con su cónyuge para ese momento, el único testigo que no he mencionado es el señor Héctor, el incluso indica que ellos nunca iban a la casa de esa pareja, que era al contrario ellos los visitaban, entonces en la realidad ninguno de estos testigos tuvo un contacto directo con ese matrimonio, ellos tienen un vínculo con la demandante, pero a ninguno le consta realmente como fue esa convivencia...”. **Quinto**, porque frente a la ayuda económica a la que se hace referencia en la providencia, considera que la misma no se probó, en la medida que “...los soportes de pago que fueron aportados por la parte demandante que obran de folios 17 a 23 del expediente, son recibos de pago por diferentes valores entre el año 2005 y el año 2008, pero ellos dicen recibimos de la señora Sonia Valencia y dicen por concepto de cuota de Víctor y Patricia Valencia, entonces no pueden entenderse cada uno de estos recibos que son la ayuda que los testigos indicaron le daba la demandante al señor Federico, porque el nombre de la demandante no aparece en ninguno de estos recibos y es muy diferente la ayuda mutua a la que se habla en estas sentencias sobre la pareja, a una ayuda para unos hijos como son Víctor Hugo y Patricia le puedan brindar a su padre en cualquier momento de la vida...”. Y **sexto**, porque no hay lugar a los intereses moratorios toda vez que la empresa siempre cumplió con la obligación de pagar la pensión de jubilación al causante y negó la prestación económica a la accionante con fundamento en lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y no de manera caprichosa.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

El apoderado de la demandante allegó de manera oportuna escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme en su totalidad la decisión de primera instancia.

El apoderado de Cervecería Unión S.A. dentro del término legal presentó escrito de alegatos de conclusión haciendo referencia a los mismos puntos del recurso de apelación, reiterando que en este juicio no se colma el requisito de la convivencia exigido por la Ley y tampoco se reúnen los presupuestos fácticos para establecer una unión, solidaridad, ayuda mutua o lazo familiar a pesar de la separación material de cuerpos para hacer extensiva esta interpretación. Y aduce que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1730 de 2020 precisó que el presupuesto de la convivencia debe acreditarse precisamente al momento del fallecimiento del causante, siendo esta la fecha en la que deben concurrir las circunstancias que demuestren para ese momento, la conformación de una vida marital que realmente se ve afectada por la muerte del cónyuge o compañera permanente y no en cualquier época como lo señala la Juzgadora de primera instancia.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si a la señora María Elsie Valencia Roldán le asiste derecho al reconocimiento y pago de la sustitución pensional derivada del fallecimiento de su cónyuge Federico de Jesús Arango Puerta, a retroactivo pensional, intereses moratorios o en subsidio indexación de la condena.

### **CONSIDERACIONES**

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa de folios 12 a 33, 71 a 80 y 86 del expediente. La Sala encuentra:

- i) Que los señores María Elsie Valencia Roldán y Federico de Jesús Arango Puerta contrajeron matrimonio el 25 de agosto de 1962.
- ii) Que de dicha unión procrearon a Víctor Hugo y María Patricia Arango Valencia, nacidos el 29 de septiembre de 1969 y el 29 de septiembre de 1963, respectivamente.
- iii) Que Cervecería Unión S.A. le concedió al señor Federico de Jesús Arango Puerta, pensión de jubilación a partir del 1º de marzo de 1978, de acuerdo a lo suscrito en el acta de conciliación del 23 de septiembre de 1978, celebrada ante el Juzgado Laboral Municipal de Itagüí.
- iv) Que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itagüí mediante sentencia de 29 de septiembre de 1978 decretó la separación de bienes formada por la sociedad conyugal constituida por Federico Arango y Elsy Valencia; declaró disuelta y en liquidación la sociedad conyugal formada por las personas mencionadas; y ordenó la inscripción de la sentencia en la Notaria respectiva.
- v) Que el señor Federico de Jesús Arango Puerta falleció el 12 de enero de 2008.
- vi) Que el 18 de marzo de 2008 la señora María Elsie Valencia Roldán le reclamó a Cervecería Unión S.A. la sustitución pensional.
- vii) Que la sociedad demandada mediante comunicado de 5 de mayo de 2008, negó la prestación económica considerando que no existió con el causante una convivencia real y efectiva dentro de los 5 años anteriores a la fecha de su fallecimiento, y para ello, indicó:

*“...Que según las declaraciones extraprocesales rendidas bajo juramento ante la Notaria Primera del Circulo de Itagüí por Marta Cecilia Ossa Piedrahita y Blanca Margarita Ramírez Palacio se establece solamente que conocen a Víctor Hugo y María Patricia Arango Valencia como hijos únicos del matrimonio de María Elsie*

*Valencia Roldán y Federico Arango, pero no manifiestan nada sobre la convivencia de María Elsie Valencia con el pensionado fallecido Federico de Jesús Arango.*

*Que en la comunicación de la señora María Elsie Valencia donde efectúa la solicitud de sustitución pensional ella manifiesta que “hace algún tiempo me encuentro en los Estados Unidos de Norte América, laborando y que con el dinero que percibo fruto de mi trabajo ayudaba a mi cónyuge Federico de Jesús Arango Puerta”.*

*Que el señor Guillermo León Betancur Arango en comunicación dirigida a la Cervecería Unión S.A. con presentación personal ante la Notaria Segunda del Circulo de Itagüí, manifiesta que “notifico que siendo apoderado de la pensión de Federico Arango Puerta renunció a ese poder, por el fallecimiento de mi tan querido tío. Cuento que el tío Federico hace 31 años vivía separado de su esposa, siempre vivió al lado de sus hermanas, hace 5 años vivía con nosotros. Sus cuotas mensuales de la sociedad mutual las pagaba él, con su propia pensión. Sus hijos nunca vieron por él y nunca le ayudaron económicamente...”.*

*Así las cosas, y establecido que la señora María Elsie Valencia Roldán, había efectuado separación de bienes el 29 de septiembre de 1978, y que las pruebas obrantes en la hoja de vida del causante de la pensión y las aportadas por la solicitante de la sustitución pensional demuestran que la señora María Elsie Valencia no se encontraba conviviendo desde más de 5 años con el señor Federico de Jesús Arango Puerta antes de su fallecimiento, situación confirmada en la misma carta de solicitud de pensión y en la declaración del señor Guillermo León Betancur Arango de fecha 14 de enero de 2008...”.*

- viii)** Que en declaración extrajuicio de 7 de diciembre de 2015 allegada por la demandante, las señoras Gladys del Carmen Morales Álvarez y Marta Cecilia Ossa Piedrahita manifestaron conocer hace 50 años al señor Federico Arango Puerta, que falleció el 12 de enero de 2008, que estuvo casado durante 17 años con la señora María Elsie Valencia Roldán, que de tal matrimonio procrearon 2 hijos, María Patricia y

Víctor Hugo Arango Valencia, que el fallecido sostuvo comunicación permanente con la señora Elsie y con sus hijos hasta el momento de su defunción por lo que no conocen otros herederos con mayor derecho.

- ix)** Y en declaración extrajuicio de 10 de diciembre de 2015, los señores Elena de Jesús Valdés Toro y Héctor Marín Moreno afirmaron conocer hace 25 y 50 años, respectivamente, al señor Federico Arango Puerta, que falleció el 12 de enero de 2008, que estuvo casado durante 17 años con la señora María Elsie Valencia Roldán, que de tal matrimonio procrearon 2 hijos, María Patricia y Víctor Hugo Arango Valencia, que el fallecido sostuvo comunicación permanente con la señora Elsie y con sus hijos hasta el momento de su defunción por lo que no conocen otros herederos con mayor derecho.
- x)** Que entre mayo de 2005 y enero de 2008 fueron expedidos 33 recibos de pago por concepto de “cuota de Víctor Hugo y María Patricia Arango Valencia, recibida de parte de la señora Sonia Valencia.
- xi)** Que el valor mesada pensional para la fecha del fallecimiento del causante ascendía a \$444.886.00.

## **DEL DERECHO PENSIONAL**

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

El documento que reposa a folios 16 del expediente informa que el señor Federico de Jesús Arango Puerta falleció el 12 de enero de 2008, por ende, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Conforme al artículo 12, cuando un pensionado fallece, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros de su grupo familiar, y según el artículo 13, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite que a la fecha de fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad, siempre y cuando acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta la fecha de su muerte y haya convivido con él no menos de cinco años continuos con anterioridad a su deceso, y de manera temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite que a la misma fecha tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 32393 de 20 de mayo de 2008, SL 45600 de 22 de agosto de 2012, SL 793 de 2013, SL 1402 de 2015, SL 14068 de 2016 y SL 347 de 2019, había sido enfática en señalar, que la Ley 797 de 2003 exige una convivencia mínima para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañero o compañera permanente, de cinco años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado.

En las sentencias SL 5151 de 2019, SL 1869 de 2020, SL 2746 de 2020 y SL 093 de 2021, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación señaló que si bien la Corporación en la interpretación del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, ha entendido que tanto la cónyuge como la compañera permanente deben cumplir con el requisito de convivencia hasta la muerte y por un lapso no inferior a 5 años continuos con anterioridad al fallecimiento, cuando ocurra la muerte del pensionado, en una interpretación armónica con el inciso 3 del literal b) *ibídem*, tratándose del evento del cónyuge separado de hecho, ha precisado que la convivencia de los 5 años puede verificarse *en cualquier tiempo*. Esto, por cuanto el legislador, cuando se refiere a la posibilidad del cónyuge de acceder al beneficio prestacional periódico cuando medie «separación de hecho», naturalmente presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte. En dicho sentido, se protege a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del

principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social. Por manera que, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes frente a la adquisición del derecho.

En ilación a lo anterior, la Corporación mencionada frente al denominado “vínculo actuante” en la sentencia SL 1920 de 10 de mayo de 2021, Radicado 86.207, precisó:

*“...Al respecto, resulta suficiente recodar lo expuesto por la Corporación, entre otras, en la sentencia CSJ SL359-2021, que reitera las reglas de los fallos CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673; CSJ SL7299-2015; CSJ SL6519-2017; CSJ SL16419-2017; CSJ SL1399-2018; CSJ SL5046-2018; CSJ SL2010-2019; CSJ SL2232-2019; CSJ SL4047-2019; CSJ SL4771-2020; CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020, en la que resaltó, que «la demostración de los lazos familiares y afectivos, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separado de hecho del causante, no es una exigencia prevista en el inciso 3º del literal b) [del artículo 13 de la Ley 797 de 2003]», pues «el texto de tal disposición establece que, en ese evento, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido», sin imponer condición adicional.*

*En efecto, en la primera providencia, la Sala asentó que el presupuesto de convivencia de cinco años puede ser acreditado «en cualquier tiempo», sin que se exija vínculo actuante, pues con el primero se cumple la finalidad de la norma, que es «proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cujus, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social».*

*De donde para la Corte «es incorrecto sostener que la cónyuge separada de hecho no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes pese a que su vínculo matrimonial está vigente».*

*Para el efecto, precisó en la sentencia CSJ SL5169-2019, que la anterior lectura*

*[...] corresponde al verdadero alcance e intelección del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, porque aunado a lo referido anteriormente acerca de su finalidad, «su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos».*

*Lo expuesto si se tiene en cuenta que, por regla general, las separaciones de hecho generan problemas estructurales en las relaciones matrimoniales que terminan con el distanciamientos de los cónyuges, cuyas múltiples hipótesis no pueden ser previstas por el legislador, por lo que corresponde a los jueces hacer una lectura de las normas según las realidades de cada caso, teniendo en cuenta que el artículo 176 del Código Civil, no establece dentro de las obligaciones de los consortes el mantener vínculo familiar y afectivo hasta su deceso.*

*En tal escenario «la ruptura de las relaciones afectivas con una persona con la que se convivió por virtud del matrimonio no es óbice para acceder a la pensión de sobreviviente, más si se tiene en cuenta, que la norma acusada no dispone tal exigencia», regla que se precisó en la sentencia CSJ SL359-2021 y la recordó de los fallos CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637; CSJ SL7299-2015; CSJ SL6519-2017; CSJ SL16419-2017; CSJ SL1399-2018; CSJ SL5046-2018; CSJ SL2010-2019; CSJ SL2232-2019 y CSJ SL4047-2019.*

*Se rememora lo anterior, porque de ello se colige que el Colegiado incurrió en el error interpretativo que se le increpa, al darle un alcance restrictivo al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, conforme a lo explicado, el cónyuge separado de hecho, que hubiese convivido con el causante por más de cinco años en cualquier época, puede acceder a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional, sin exigírsele el denominado vínculo actuante...”.*

Por último, ha señalado el máximo Tribunal que a la cónyuge y/o compañera permanente no le está previsto demostrar que dependía económicamente del fallecido, pues tal requerimiento no se encuentra establecido para ostentar la condición de beneficiaria de una pensión de sobrevivientes, tal y como puede

confirmarse con la simple lectura de los literales a) y b), del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la medida en que exige, para esta clase de beneficiarias, es el requisito de la convivencia (Sentencia SL 3847 de 10 de septiembre de 2019, Radicado 64.287).

En ese orden de ideas, teniendo presentes las reflexiones anteriores, que son acogidas por esta Sala en este asunto, conforme al material probatorio se analizará el requisito de convivencia entre los cónyuges durante 5 años en cualquier tiempo.

Sea lo primero indicar que en el interrogatorio de parte absuelto por la señora **María Elsie Valencia Roldán**, manifestó que se separó de cuerpos del señor Federico de Jesús Arango Puerta desde 1979, que a partir de dicha fecha no volvió a convivir con su cónyuge, que la separación de cuerpos obedeció a dificultades como la falta de dialogo, que vive en los Estados Unidos desde 1981 hasta la actualidad porque allí reside por temporadas, que para la fecha en que se separó del causante sus hijos tenían entre 14 y 16 años, que el causante mantuvo su responsabilidad parental con sus hijos, que viajó sola al exterior en razón a que sus hijos se encontraban estudiando y se quedaron conviviendo con su madre, que laboró en Estados Unidos en oficios varios por no contar con la documentación requerida y enviaba dinero para el sostenimiento de sus hijos, y que no le conoció a Federico de Jesús otra relación sentimental.

Ahora, se procedió con el análisis de los testimonios de los señores Gladys del Carmen Morales Álvarez, Martha Cecilia Ossa Piedrahita y Héctor Marín Moreno allegados por la demandante, con el fin de verificar si resulta conducente para orientar el convencimiento de la Sala en torno a la existencia del referido requisito de la convivencia entre la reclamante y el causante, y para ello se acogió las directrices plasmadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> En la sentencia 4978 del 5 de mayo de 1999

La señora **Gladys del Carmen Morales Álvarez**, indicó que conoce a la señora María Elsie Valencia Roldán desde hace más de 50 años porque estudiaron juntas, que conoció al señor Federico de Jesús Arango Puerta porque también vivió en Itagüí, que tuvo conocimiento que los señores María Elsie y Federico de Jesús estuvieron casados por unos 17 años, no recuerda la fecha del matrimonio, que procrearon 2 hijos Víctor Hugo y Patricia, que vivían en casa de propiedad de la demandante, que no visitaba a la pareja sino que se encontraban en lugares como la iglesia, que no tiene presente hasta que periodo estuvieron juntos los cónyuges, pero supo que la señora María Elsie se fue para Estados Unidos, “...*de Estados Unidos ella le mandaba una plata, que yo iba con una sobrina de María Elsie, Lina Marcela e íbamos y se la llevábamos a Prado y la sobrina le hacía firmar un recibo, pero no me di cuenta de cuanto plata...*”, que tal situación la realizó aproximadamente cuatro veces y de forma mensual, que los hijos de la pareja se encontraban residiendo en Estados Unidos y visitaban al señor Federico de Jesús, que desde que la actora se fue del país sólo se han visto tres veces, que no sostuvo contacto directo con aquella mientras estuvo en Estados Unidos, sino que lo hacía por medio de su hermana Sonia y su sobrina Lina Marcela.

La deponente **Martha Cecilia Ossa Piedrahita** manifestó que conoce a la señora María Elsie Valencia Roldán hace más o menos 50 años, que conoció al señor Federico de Jesús Arango Puerta porque era el esposo de María Elsie, pero que no existió mucho trato, que nunca los visitó, que procrearon dos hijos Víctor Hugo y Patricia, que los cónyuges convivieron por 17 años “...*porque yo me daba cuenta, porque como yo me mantenía en la casa de la mamá de ella...*”, que no recuerda la fecha de separación de aquellos, que la señora María Elsie vivió en los Estados Unidos y que por medio de su hermana Sonia cada mes le enviaba dinero al señor Federico de Jesús hasta su fallecimiento, que la actora se llevó a sus dos hijos también para Estados Unidos, que cuando Víctor Hugo y Patricia cuando venían al país visitaban a su padre Federico de Jesús, que en la actualidad Patricia sigue residiendo en Estados Unidos y Víctor Hugo falleció, y que María Elsie viene con frecuencia al país para visitar a su mamá.

El declarante **Héctor Marín Moreno**, adujo que que conoce a la señora María Elsie Valencia Roldán porque es la tía de su esposa, que conoció al señor Federico de Jesús Arango Puerta porque se lo presentó su esposa y María Elsie hace varios años, que tuvo conocimiento que los señores María Elsie y Federico de Jesús convivieron como pareja y vivían en Itagüí, que tuvieron en común dos hijos Víctor Hugo y Patricia, que Federico de Jesús trabajaba en la Cervecería Unión y María Elsie era ama de casa, que estuvieron juntos aproximadamente 17 años “...*porque resulta que el matrimonio de ella coincidió con el matrimonio mío, yo me casé en el 66 y ellos en el 62, entonces me acordaba de que ellos vivieron 17 años...*”, que la pareja se separó pero no recuerda la fecha, que la demandante vivió en el exterior aun estando el matrimonio vigente con el causante, que para la fecha del fallecimiento del señor Federico de Jesús la actora se encontraba en Estados Unidos y tenía aun comunicación con el mismo, que aquella y sus hijos le brindaban ayuda económica al causante, y que Víctor Hugo y Patricia siguieron en contacto con su padre.

Luego, tal y como lo ha precisado la Sala Laboral del órgano de cierre de esta jurisdicción, lo que quiso amparar el legislador, de cara a la prestación pensional de sobrevivientes, es la perdurabilidad, de manera patente, de la «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable (...)»<sup>2</sup>,

A juicio de la Sala, la “comunidad de vida” quedó evidenciada en este caso, máxime si se tiene en cuenta que las testigos Gladys del Carmen Morales Álvarez, Martha Cecilia Ossa Piedrahita y Héctor Marín Moreno, con conocimiento de causa por la relación de vecindad, amistad y parentesco, que tenían con los cónyuges, ciertamente describen con espontaneidad, credibilidad, claridad y coherencia como era la relación de los señores María Elsie Valencia Roldán y Federico de Jesús Arango Puerta, dan las razones y ciencia de sus dichos, describiendo el hogar de la pareja e informando lo que les constaba directamente frente a la convivencia marital permanente e ininterrumpida, desde el 25 de

---

<sup>2</sup> CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605; SL7299-2015; SL1399-2018

agosto de 1962 fecha en la cual contrajeron matrimonio y durante 17 años, es decir, hasta el año 1979, esto es, por más de cinco años.

Declaraciones que a la luz de la sana crítica devienen para la Sala totalmente admisibles y creíbles, y coinciden con el dicho de la demandante María Elsie Valencia Roldán frente al requisito de la convivencia, porque la mencionada afirmó en el escrito de demanda que convivió con su cónyuge durante 17 años hasta 1979.

De otro lado, obran en el expediente las declaraciones extrajuicio de 7 y 10 de diciembre de 2015 donde los señores Gladys del Carmen Morales Álvarez, Marta Cecilia Ossa Piedrahita y Héctor Marín Moreno manifestaron conocer hace 50 años al señor Federico Arango Puerta, que falleció el 12 de enero de 2008, que estuvo casado durante 17 años con la señora María Elsie Valencia Roldán, que de tal matrimonio procrearon 2 hijos, María Patricia y Víctor Hugo Arango Valencia, que el fallecido sostuvo comunicación permanente con la señora Elsie y con sus hijos hasta el momento de su defunción por lo que no conocen otros herederos con mayor derecho.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, como las practicadas ante alcalde o notario, pueden tomarse como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 220 del Código General del Proceso, no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite. Razonamiento que según la Corporación se acompasa con la política legislativa que en materia probatoria se viene adoptando, con la finalidad de menguar el exceso de rigor formal que antaño campeaba en los códigos de procedimiento. Así lo indicó en la sentencia de Radicado 37.517 del 29 de mayo de 2012, reiterada en sentencias de Radicado 42536 del 6 de marzo de 2013, SL 1227 de 2015, SL 14067 de 2016 y SL 3134 de 2020 de Radicación 70165 de 25 de agosto de 2020, en esta última indicó:

“...De conformidad con el criterio expuesto, en ninguna violación medio pudo incurrir el juez de segundo grado, al haber valorado las declaraciones extrajuicio,

rendidas en la Notaría Primera del Circulo de Fusagasugá por Nelsi Patricia y Óscar Javier Cucaita Martínez, pues no era necesaria su ratificación dentro del proceso, como se dejó visto, salvo que la parte contraria la hubiese solicitado, lo cual no aconteció en el presente asunto en ningún momento de las instancias previas...”.

En el presente asunto, la parte accionada no solicitó la ratificación de tales declaraciones, por ello, no era necesario en este juicio llevar a cabo dicha diligencia para que tuviesen mérito probatorio, empero no puede pasar por alto esta Sala de Decisión, que el valor probatorio de dichas declaraciones debe ser analizado con el rigor propio de la prueba recaudada al interior del proceso, pues el hecho de no haberse solicitado su ratificación por la parte contra quien se aduce no la releva del deber de contener elementos que permitan dar por probada las circunstancias allí contenidas, tales como el determinar el testimoniante la razón del conocimiento de los hechos sobre los cuales depone.

A juicio de la Sala, las declaraciones rendidas por los señores Gladys del Carmen Morales Álvarez, Marta Cecilia Ossa Piedrahita y Héctor Marín Moreno, coinciden con lo dicho por los mencionados en este juicio respecto del periodo de convivencia entre los señores María Elsie Valencia Roldán y Federico de Jesús Arango Puerta, entendiéndolo como la conformación de una familia con vocación de permanencia, por un tiempo superior a los cinco años en cualquier tiempo. Por ende, tienen mérito probatorio si se tiene en cuenta que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le confiere al Juzgador la facultad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, salvo en los casos en que ley exige determinada solemnidad para la validez de la prueba.

En ilación a lo anterior, Cervecería Unión en escrito de 8 de mayo de 2008 indicó que en la hoja de vida del pensionado fallecido señor Federico de Jesús Arango Puerta milita comunicación con presentación personal ante la Notaria Segunda del Circulo de Itagüí donde el señor Guillermo León Betancur Arango en comunicación dirigida a la Cervecería Unión S.A. manifiesta que “...*notifico que siendo apoderado de la pensión de Federico Arango Puerta renunció a ese poder, por el*

*fallecimiento de mi tan querido tío. Cuento que el tío Federico hace 31 años vivía separado de su esposa...”.*

Se duele la parte recurrente en su recurso de alzada que no se acreditó la convivencia durante cinco años en cualquier época, de la accionante con el causante de la prestación, alegando que los declarantes no visitaban la pareja, y que alguna de ellas no recordaba fecha de matrimonio de estos, sin embargo no puede pasar por alto esta Colegiatura que todos los testimoniantes dan razón de haber conocido los miembros de la pareja por espacio de 50 años, con una relación cercana y que conforme al recaudo probatorio la convivencia se dio hasta el año 1979, lo que genera una situación de entendible no recordación de fechas, toda vez que trascurrieron décadas entre la convivencia y las declaraciones respectivas, ubican convivencia en Itagüí, y la señora Gladys del Carmen Morales refiere que se encontraba con la pareja en la iglesia. Tampoco puede dejarse de lado que el señor Héctor Marín Moreno, trae elementos que referencian su rememoración.

Por lo anterior, en conjunto del análisis de la prueba se genera certeza para la sala que la convivencia por cinco años en cualquier época entre la pareja fue real y efectiva.

Así las cosas, conforme al material probatorio analizado en conjunto encuentra esta Sala plenamente acreditado el requisito de convivencia entre los señores María Elsie Valencia Roldán y Federico de Jesús Arango Puerta, durante 5 años en cualquier tiempo; y si bien entre los cónyuges se dio la separación de bienes y la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, lo cierto es que, en todo caso, es que el vínculo matrimonial se encontraba vigente al momento del deceso del pensionado.

En razón de lo anterior, considera la sala que contrario a lo expuesto en el recurso de alzada, la prueba testimonial den conjunto, incluyendo las declaraciones extrajuicio traídas al proceso, si brindan certeza sobre la convivencia de la pareja Arango Puerta y valencia Roldán, supero con creses los

cinco años en cualquier tiempo que ha señalado la sala de Casación Laboral del la Honorable Corte Suprema de Justicia en los precedentes citados, sin que se haga necesario acreditar vínculo actuante alguno entre la pareja con posterioridad a su separación, lo que incluye la no necesidad de asistencia económica.

En consecuencia, la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, por las razones expuestas.

## **DE LOS INTERESES MORATORIOS**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prescribe que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata la normatividad mencionada, la entidad administradora correspondiente debe reconocer y pagar al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a recibir el pago de las mesadas pensionales emerge del cumplimiento de los requisitos que la Ley exige para poder acceder a la pensión reclamada.

Sin embargo, en sentencias de 29 de mayo de 2003, Radicado 18.789; 13 de junio de 2012, Radicado 42.783; y 6 de noviembre de 2013, Radicado 43.602, el Alto Tribunal precisó que no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios en aquellos eventos en que la decisión de las administradoras de pensiones públicas o privadas de negar una prestación encuentren plena justificación, bien porque tengan un respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los Jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a tales administradoras no les compete y les es imposible predecir. Lo anterior, teniendo en cuenta que en muchos casos la interpretación de la norma a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social no coincide con el texto literal del precepto que

las administradoras deben aplicar al momento de definir la procedencia de la prestación reclamada.

En consecuencia, no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque la pensión de sobrevivientes se concede en este juicio a la actora en aplicación del precedente jurisprudencial referido en esta instancia, que para el 3 de junio de 2008 fecha en la cual Cervecería Unión S.A. le negó la prestación a la actora no había proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y por ello, se revocará en este punto la decisión.

### **DE LA INDEXACIÓN.**

La indexación del retroactivo pensional reconocido resulta viable, porque es el mecanismo objetivo de corrección monetaria que se aplica cuando las entidades administradoras que integran el sistema de seguridad social pagan tardíamente las obligaciones a su cargo, y la ley no prevé otra forma de solucionar su detrimento económico. Por lo tanto, se condenará a Colpensiones a reconocer y pagar a la actora las mesadas pensionales adeudadas, debidamente indexadas.

### **DE LAS COSTAS**

En lo que respecta a las costas, ha de indicarse que el artículo 365 del Código General del Proceso, en su numeral 3, impone al juzgador la obligación de proferir condena en costas en caso que mediante la sentencia de segunda instancia confirme en todas sus partes la decisión de primera instancia, empero en este caso ante la absolución de los intereses moratorios, la sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

Así las cosas, se confirmará y revocará la decisión que se revisa en apelación.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

**PRIMERO:** Revocar la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a Cervecería Unión S.A. a reconocer y pagar a la señora María Elsie Valencia Roldán los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

**SEGUNDO:** Se condena a Cervecería Unión S.A. a reconocer y pagar a la demandante el retroactivo pensional reconocido, debidamente indexado.

**TERCERO:** Confirmar en lo demás la decisión que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

**CUARTO:** Ante la prosperidad parcial del recurso de alzada, no hay lugar a condena en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA  
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° 113 de junio 30 de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA  
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA  
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**

**MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA  
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez  
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario  
2364/12

Código de verificación:

**ae99677233ff40980c5a45879bed726a9f50d68c442e38a2d6779aa17743b0bb**

Documento generado en 29/06/2021 03:37:11 PM